

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 21 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el Juez 2º de lo civil de esta Capital, Lic. D. Mariano Antunez, contra el auto de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito que lo suspendió por seis meses privándolo del sueldo por igual tiempo; el informe de la autoridad; lo pedido por el Promotor Fiscal; la sentencia del Juzgado de Distrito que ampara y protege al quejoso, con todo lo demás que ver convino, y considerando: que la violación de las garantías consignadas en los artículos 14, 20 y 22 de la Constitución federal de que se queja el Juez Lic. Antunez por haberse aplicado en su contra las disposiciones del Código de Procedimientos por hechos anteriores á la publicación de este, no se ha verificado en el caso, porque la competencia entre el Juzgado 3º y el 2º de lo civil que dió origen á la suspensión y privación de sueldo del Juez Antunez no terminó de parte de él antes de la publicación y vigencia de dicho Código, pues todavía en 25 de Setiembre de 1872 remitió su informe relativo á la competencia á la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito; en esa fecha ya regía el Código, y con posterioridad, al dirimirse la competencia, fué cuando la primera Sala del Tribunal Superior del Distrito decretó la suspensión y privación de sueldo, contra cuya disposición se pide el amparo emitiéndose como fundamento que se ha dado efecto retroactivo al Código, lo cual no ha sucedido; por lo expuesto y de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada el 6 de Marzo último por el Juez 2º de Distrito de esta Ciudad en la parte que concede el amparo, y se decreta: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al Juez 2º de lo civil de esta Ciudad Lic. D. Mariano Antunez, contra el auto de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Distrito que lo suspendió por seis

meses y lo privó de sueldo por igual tiempo.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron—*Pedro Ogaszon.—Juan J. de la Garza.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—L. Mª Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 10 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado 2º de Distrito de México por el General D. Felipe B. Berriozabal, contra una disposición del Juzgado 3º de lo civil de esa Ciudad, por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor que suscribe en el juicio de amparo promovido por el C. General Felipe Berriozabal, contra las resoluciones dictadas por el C. Juez 3º de lo civil á petición del C. Lic. Manuel Dublan, en representación del C. Mariano Riva Palacio, supuesto el estado del juicio que es el de alegar, y haciéndolo en la forma prevenida por la ley dice: que la justificación de V. se ha de servir declarar en definitivo, que la Justicia Federal ampara y protege al C. Berriozabal contra las determinaciones del C. Juez 3º de lo civil, por que con ellas se

ha violado en la persona del quejoso, las garantías que otorga el art. 14 de la Constitución general de la República en vista de las razones que pasa á exponer.

Segun el informe rendido por el C. Juez 3º de lo civil con las copias de los autos referentes al juicio promovido por el Lic. Dublán en representacion de Riva Palacio, está enteramente demostrado que la accion intentada, demanda de un contrato celebrado en el año de 1869 bajo las garantías establecidas por las leyes vigentes al tiempo de celebrarse ese contrato, y por consiguiente, si en esas leyes se establecen ciertas reglas para demandar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por ese convenio, siempre que se use de un procedimiento que haya sido creado por una ley posterior que restrinja aquellas garantías, es incuestionable que se infrinje el art. 14 de la Constitución, por que á esa ley se le dá un efecto retroactivo. En el presente caso ha sucedido así, supuesto que se ha seguido un camino enteramente nuevo, cual es el juicio hipotecario, cuando por el Código de Procedimientos que no solo restringe los terminos, sino que tambien altera en lo sustancial las proseripciones de la ley de 4 de Mayo de 1857, sobre procedimientos en el juicio ejecutivo, como lo demuestra bien claramente el contenido del artículo 983 del Código mencionado, cuando previene, que en la sentencia no solo se ha de declarar si procede ó no al remate, sino que se decida definitivamente sobre los derechos controvertidos, lo cual importa una violacion bien grave y trascendental para los litigantes, y especialmente para el reo ó demandado, cuya condicion se ha considerado tanto antes, por las leyes. Disminuir pues estas garantías, bajo cuyo amparo se ha celebrado el contrato entre Riva Palacio y Berriozabal, constituye una violacion del art. 14 de la Constitución que prohíbe el efecto retroactivo de las leyes aplicandolas á hechos verificados antes de su promulgacion; lo mismo sucedería si por ejemplo, la condicion

del autor se empeorase de manera, que por los preceptos del nuevo Código se ampliasen los medios de defensa del demandado, respecto de los que establecía la ley en vigor al tiempo de la celebracion del contrato, de donde nacieran las acciones que se vióran en la necesidad de ejercitár en juicio. El que suscribe no creo necesario entrar en mayores consideraciones respecto de los fundamentos en que se apoya la resolucion del C. Juez 3º de lo civil, tomados del Código de esta misma clase, porque siendo la promulgacion de este, posterior al contrato, se encuentra en las mismas condiciones de retroactividad del de procedimientos que se ha usado para la secuela de una demanda, que en concepto del que suscribe debería haberse sentenciado conforme á las proseripciones de la ley de 4 de Mayo de 1857 ya citada, porque esta era la vigente cuando se contrajeron las obligaciones cuyo cumplimiento se trata de hacer efectivo.

Por las razones expuestas y considerando fundadas en justicia las que expone el quejoso en su alegato, concluye el infrascripto Promotor reproduciendo la petición que tiene hecha al principio, sobre que es de otorgarse el amparo que solicita el C. Felipe B. Berriozabal contra los procedimientos del C. Juez 3º de lo civil de que se queja.

México, Marzo 24 de 1873.—*Moctezuma.*

Es copia. México, Abril 9 de 1873.—*Moctezuma.*

Sentencia del C. juez de Distrito.

México, Abril 9 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. general Felipe Berriozabal á virtud de reputar violada en su persona, con el acto del C. Juez 3º de lo civil en que determinó la expedicion de cédula hipotecaria, la garantía individual que otorga el artículo 14 de la Constitución general; visto el informe del

C. Juez 3º de lo civil; lo pedido por el Ministerio fiscal; las pruebas rendidas por la parte quejosa y visto en fin lo que versó debía; atendiendo á que la violación de garantía en el caso se hace consistir, en que al determinarse por el Juzgado 3º la expedición de la cédula hipotecaria por razón de lo dispuesto en los artículos 3,218 del Código civil y 951 del de procedimientos, se dió á estas leyes en su aplicación un efecto retroactivo, atacando los legítimos y anteriormente adquiridos derechos del quejoso, y considerando, primero: que habiendo sido el objeto de la expedición de cédula hipotecaria no solo el trámite violento de un juicio sumario ó de tal ó cual otro, sino el fin de tener por cumplido y exigible un censo en razón del artículo 3,218 del Código civil, que según se ha comprobado por los documentos exhibidos en el término de prueba, las escrituras de hipoteca en vista de las cuales y para cuyo pago se ha procedido en la vía expresada fueron otorgados en el año de 1869, esto es, con anterioridad á la promulgación del Código civil. Considerando segundo: que la retroactividad á que el artículo 14 constitucional se contrae estableciendo como garantía individual su observancia, consiste en que derechos legítimamente adquiridos sean detenidos ó variados por leyes contrarias á las preexistentes que volviendo sobre lo pasado se mudan en perjuicio de la persona objeto de ella, ó que hechos anteriores se castiguen con arreglo á ley posterior: que en el caso, habiéndose celebrado un contrato, el otorgamiento de hipoteca á que se refieren las escrituras de fojas 21 y 27, bajo las bases de las leyes en esas fechas vigentes y supuesta la ley 1ª tít. 1º lib. 10 de la N. R., debe atenderse para su cumplimiento á las disposiciones legales existentes en la época en que se celebró el contrato y no á las promulgadas posteriormente, pues como dice Eseriche Dicc. de Leg. § dos pal. efecto retr: "desde el momento en que se ha formado el vínculo de un contrato, resultan para los contrayen-

tes derechos y obligaciones que las leyes posteriores no pretenden ya quitarlos"... "y los derechos que resultan de los contratos, ahora sean actuales y efectivos, ahora sean solo expectativos, están asimismo fuera del alcance de toda ley posterior." Considerando tercero: que si bien por regla general se dice que en materia de procedimientos no se efectúa la retroactividad prohibida por la ley, porque en tal caso siendo los derechos que se invoquen puramente facultativos, se hallan sujetos á las resoluciones posteriores y no se tienen "*como entrados en nuestro patrimonio*;" prescindiendo de las excepciones de esta regla, hay que tener presente, que el quejoso no ha interpuesto el recurso por el solo trámite ó procedimiento dictado por el Juzgado 3º de lo civil, sino por la aplicación que con referencia á los contratos ya mencionados se ha hecho del artículo 3,218 del Código civil para el efecto de dar por cumplidos y exigibles los plazos señalados en el contrato, es decir, aplicar lo determinado por una ley posterior, el Código civil, á un contrato celebrado anteriormente y bajo la observancia de otras leyes, lo que es indudable contraña la transgresión del artículo constitucional citado, pues se atacan derechos legítimos y anteriormente contraídos; y sin que pueda objetarse el que una de las escrituras comprenda la cláusula de tenerse por cumplido y exigible el capital por la falta de pago en sus réditos, pues debiendo atenderse con preferencia á la retroactividad que se efectúe de derecho en el caso, la observancia y aplicación expresa de ley posterior, el artículo 3,218 del Código civil debe producir la violación que se pretende aun cuando de hecho para el quejoso fuese el mismo su resultado material, lo que no sería de considerarse así si la determinación judicial, objeto del amparo, se hubiese fundado en las cláusulas del contrato y no en ley posterior; y teniendo por último presente lo dispuesto en el artículo 3º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la

Union ampara y protege al C. Felipe Berriozabal contra la resolución del Juzgado 3º de lo civil, en que dispuso la aplicación y observancia del artículo 3,218 del Código civil con referencia á la hipoteca ó reconocimiento otorgado en las escrituras de fechas 19 de Junio y Julio de 1869, por violarse con ello la garantía individual que otorga el artículo 14 de la Constitución. Hágase saber; remítase copia de este fallo al Diario Oficial y Semanario Judicial, y elévense los autos previa citación fiscal, á la Corte Suprema de Justicia para su revisión.

Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo. Doy fé.
—José M. Canalizo.—Manuel M. de Chavero, secretario.

Es copia. México, Abril 9 de 1873.—
Manuel M. Chavero.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de esta Ciudad por el General D. Felipe B. Berriozabal contra los procedimientos del juzgado 3º de lo civil de esta Ciudad, que decretó la expedición de cédula hipotecaria contra el poseedor de la hacienda de la Asunción, sita en jurisdicción de Chaleco perteneciente al Estado de México, por el adeudo de capitales y réditos que dicha hacienda reconoce á favor de D. Mariano Riva Palacio y de las Señoras Dª Francisca, Dª Cruz y Dª Dolores Garrido, á quienes representa el Lic. D. Manuel Dublan, con cuyo decreto reputa el quejoso, violada en su persona la garantía á que se refiere el artículo 14 de la Constitución federal, por darse efecto retroactivo á los artículos 3218 del Código civil y al 951 del de procedimientos, vigentes en el Distrito federal; y considerando, primero: que en el expediente aparece que el Lic. Dublan soli-

citó la expedición de la cédula hipotecaria, fundado en el artículo 3218 del Código civil, y conforme á lo dispuesto en los artículos 955 y 956 del de procedimientos civiles; pues aunque acompañó al hacer tal petición las escrituras de hipoteca, fué con el solo objeto de acreditar que la hacienda de la Asunción reportaba el gravamen hipotecario á favor de sus poderdantes. Segundo: que dichas escrituras fueron otorgadas en 19 de Junio una y 19 de Julio de 1869 la otra, en cuyas fechas aun no se habían promulgado los códigos civiles y de procedimientos del Distrito federal. Tercero: que por consecuencia, aplicar el artículo 3218 del Código civil al contrato que expresan las referidas escrituras, es darle efecto retroactivo al mismo artículo. Cuarto: que si bien por la cláusula sétima de la escritura otorgada á favor de D. Mariano Riva Palacio, el General Berriozabal se obligó á que si se faltase al pago de un tercio adelantado de réditos ó al de uno de los abonos con que debía redimirse el capital, en cualquiera de ambos casos se tendría por vencida la escritura y el acreedor podía exigir el pago de capital y réditos en la vía ejecutiva; el valor de esta cláusula de ninguna manera ha podido hacerse extensivo á la escritura de las Señoras Garrido, ni por ella ha podido privarse á Berriozabal de las defensas que legalmente le correspondan, aun á pesar de la misma cláusula. Quinto: que atendiendo á los términos con que está redactada la cláusula y al tiempo en que Berriozabal se obligaba á cumplir con lo expresado en ella, debieron proceder y entenderse con el mismo Berriozabal el juicio de conciliación y el requerimiento de pago, pues es el deudor que aparece obligado en el instrumento que trae aparejada ejecución. Sexto: que de autos aparece que ninguna diligencia se ha entendido con Berriozabal en la demanda entablada por el Lic. Dublan á nombre del Señor Riva Palacio y de las Señoras Garrido, privándose por lo mismo al primero de las defensas que concede la Constitución. Séti-

mo: que si bien el Código de procedimientos civiles ha introducido una inovacion en el procedimiento hipotecario, tal inovacion está intimamente enlazada con la reforma radical que introdujo el Código civil en el sistema hipotecario, mejorando notablemente la condicion del acreedor, de modo que en este punto no pueden aplicarse las disposiciones del Código de procedimientos á un negocio, sin considerar aplicables á él las de el Código civil; dándose por lo mismo efecto retroactivo no solo al Código de procedimientos, sino tambien al civil; por lo expuesto, y de conformidad con lo que dispone el artículo 101 de la Constitucion federal, se decretar: que se confirma la sentencia pronunciada, respecto de este juicio, el 9 del actual por el Juez 2º de Distrito de esta Ciudad, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Felipe Berriozabal contra la resolucion del juzgado 3º de lo civil, en que dispuso la aplicacion y observancia del artículo 3218 del Código civil, con referencia á la hipoteca ó reconocimiento otorgado en las escrituras de fechas 19 de Junio y Julio de 1869, por violarse con ella la garantía individual que otorga el artículo 14 de la Constitucion.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos; archívese á su vez el Toca.

Así por mayoria de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordoz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 9 de 1873.—*Liz. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado 1º de Distrito de México por Nicolás Martínez, contra su consignacion al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez.

El Promotor dice: que el presente juicio de amparo fué promovido por Mº de Jesus Mendoza á nombre de su marido Nicolás Martínez, conocido tambien por el nombre de Pedro Hernandez, quejándose de que Martínez fué tomado de leva el mes de Febrero del año anterior, consignándolo la Comandancia militar al servicio de las armas contra su voluntad, violándose la garantía que le concede el artículo 5º de la Constitucion, y encontrándose comprendido en los exceptuados por la ley de 17 de Mayo último por ser casado. Recibido el juicio á prueba, presentó un certificado de la parroquia respectiva que acredita su estado de casado, y una informacion por la que identifica que es la misma persona la conocida con los nombres de Martínez ó Hernandez. Justificado el dicho de la Mendoza, y cierto el hecho de que Martínez ó Hernandez, contra su voluntad sirve en el ejército, restablecido el orden constitucional es evidente que existe la violacion de la garantía reclamada; por lo mismo puede el juzgado declarar, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Pedro Hernandez.—México, Marzo de 1873.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*Joaquín Sanchez Gonzalez*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, Marzo 15 de 1873.—Visto el recurso de amparo promovido por María de Jesus Mendoza, á nombre de su marido